

## **Análisis de coyuntura – marzo de 2008.**

Panamá:

### **Crecimiento económico sin equidad agudiza contradicciones sociales**

Los ajustes económicos y la represión selectiva han hecho sentir sus efectos en Panamá a principios de 2008 recrudeciendo los movimientos reivindicativos en los sectores laborales así como en las comunidades cuyo medios de vida son amenazados por las políticas gubernamentales. Los trabajadores de la construcción así como los empleados públicos del sector social (educación y salud) y las comunidades afectadas por proyectos ajenos a plan de desarrollo alguno, como los mineros, las hidroeléctricas y turísticos han redoblado sus protestas contra el neoliberalismo.

El gobierno y los inversionistas, sin embargo, se felicitan por la tasa de crecimiento anual del producto interno bruto que promedia el 10 por ciento. Este incremento, que el mismo gobierno no puede explicar, se suma al “boom” de la construcción y a las expectativas creadas por la ampliación del Canal de Panamá. El país, por su lado, sigue con el 40 por ciento de las familias por debajo de la línea de pobreza, el 46 por ciento de los trabajadores en el sector informal y con los indicadores de inequidad aumentando. Para coronar la situación, el gobierno se encuentra agobiado por acusaciones de corrupción que afectan todos los niveles públicos y privados. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció que tanto en 2007 como 2008 los tránsitos disminuirán significativamente. La tendencia es consecuencia de la crisis económica de EEUU que disminuyó las importaciones del exterior. La desaceleración del movimiento marítimo afectará los ingresos por peajes del Canal.

### **Elecciones de 2009**

Las contradicciones se agudizan faltando poco más de un año (mayo de 2009) para celebrarse las elecciones generales. El Partido Revolucionario Democrático (PRD), actualmente en el poder, realizó su VII Congreso donde escogió su nuevo comité ejecutivo nacional. Tanto la nueva presidenta del PRD, Balbina Herrera, como el nuevo subsecretario general, Juan C. Navarro, se proclamaron precandidatos a la Presidencia de la República. Balbina Herrera, actual ministra de Vivienda, y Navarro, alcalde de la ciudad de Panamá, pretenden suceder al presidente Martín Torrijos.

En la oposición de derecha, dividida en cinco partidos, hay seis precandidatos. El Partido Panameñista, que ha gobernado dos veces en los últimos cuatro lustros, presenta tres precandidatos. Tanto los partidos de gobierno como los de oposición promueven políticas neoliberales, están comprometidos con el TLC con EEUU y sus políticos son acusados de corrupción.

Un sector de las fuerzas de izquierda lanzó el Partido de Alternativa Popular (PAP), que plantea la alternativa electoral para organizar políticamente a los trabajadores y otros sectores populares. El FRENADESO se mantiene al margen del proceso electoral planteando que no existen condiciones para participar en torneos electorales organizados por la clase dominante.

### **Represión de los movimientos populares**

El 12 de febrero de 2008 fue asesinado por un policía en la ciudad de Colón un trabajador Al Smith R., del Sindicato de Trabajadores de la Construcción (SUNTRACS), afiliado a FRENADESO, cuando entraba con un herido al hospital de la ciudad Atlántica. Según los abogados atendiendo a los detenidos, más de trescientos trabajadores fueron privados de libertad,

sin derecho a la asistencia legal y violándose el debido proceso. La represión incluyó arrestos masivos, golpes, bombas lacrimógenas, perdigones y golpizas indiscriminadas.

Smith, quien también era estudiante universitario, es el tercer obrero de la construcción asesinado por agentes del gobierno en el último año. El gobierno acosa a los dirigentes de SUNTRACS y les ha negado la subvención que mandata la ley destinada a los programas educativos de los sindicatos.

### **Campesinos e indígenas en la Presidencia**

Apenas días después de las manifestaciones en protesta por el asesinato de Smith, se constituyó en la plaza Catedral, a un costado del Palacio Presidencial “Las Garzas”, la Movilización Nacional Comunitaria Ecologista. Delegaciones de campesinos e indígenas de comunidades provenientes de todo el país lograron sentar al presidente Torrijos a conversar sobre los problemas del país. Torrijos les propuso negociar formalmente en el marco de la Concertación Nacional. Las peticiones fundamentales de la Movilización se centran en el respeto del derecho humano al agua, el fin del hostigamiento y violación de derechos fundamentales en las comunidades rurales del país y la apertura de mesas temáticas participativas sobre política energética, ambiental y turística.

Según Benjamín Ramón M., dirigente de la Movilización, “subsisten graves insuficiencias, que limitan la posible acción de autoridades de cara a la existencia de conflictos socioambientales, las cuales son aún más profundas y preocupantes en materia ambiental e indígena”.

Territorios libres de minería

Mientras tanto en el resto del país, los municipios donde las empresas mineras se han volcado a explotar los yacimientos revalorizados en el mercado, los especuladores han sido rechazadas por sus respectivos pueblos. Un total de siete municipios se han declarado “territorios libres de minería”. El municipio de Guararé, en la provincia de Los Santos, citando la Constitución Política resolvió que "es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua, y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana".

Además, como la Constitución establece que "los concejos municipales tendrán competencia exclusiva para dictar medidas a fin de proteger y conservar el medio ambiente", sus ediles resolvieron declarar al Distrito de Guararé área libre de la minería.

12 de abril de 2008.

## **Análisis de coyuntura abril – mayo de 2008**

### **El capital financiero se adueña del país**

El año 2008 se inició en Panamá como una carrera desenfrenada de los inversionistas que luchan por acumular riquezas enfrentados a una oposición popular desarticulada sin capacidad de generar propuestas o establecer alianzas estratégicas. La carrera la está ganando el sector empresarial que cada vez se apropia de una parte más grande de la producción nacional. A simple vista, la riqueza se expresa en estilos de vida cada vez más sofisticados entre quienes concentran la riqueza. En el otro extremo, la pobreza se hace notoria entre los sectores excluidos que apenas sobreviven con empleos informales.

La carrera desenfrenada por acumular es encabezada por dos grandes casas bancarias. Por un lado, el Banco General (opera desde 1960) que se acaba de fundir con el Banco Continental (del grupo Motta). A su vez, el HSBC (Anglo-chino) que compró los intereses del Chase Manhattan

Bank en Panamá y, además, adquirió el Banco del Istmo (el banco privado más grande del país hasta su venta).

Entre ambos bancos controlan las finanzas del sector servicios, del sector manufacturero y agroindustrial de Panamá. En 2007 comenzaron a penetrar las reservas de la Caja de Seguro Social (CSS) y de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Están a la espera de una legislación más favorable que les permita controlar los servicios públicos de salud y las fuentes de agua del país. A pesar de sus esfuerzos, no han logrado introducir las reformas necesarias al sector educativo.

Los costos de estos cambios en las esferas financieras, las están pagando los trabajadores. La flexibilización laboral ha eliminado miles de empleos y convertido el empleo por destajo como la norma. En el campo han arruinado centenares de medianos productores y convertido la agroindustria en cuestión del pasado.

El asesor económico de la Organización Nacional de Productores Agropecuarios (Onagro), Alexis Soto, sustenta que Panamá ha sufrido el “*inmediatismo* y la improvisación de nuestros gobernantes”. Además, Panamá no es autosuficiente en el sector primario. Panamá tiene un producto interno bruto (PIB) compuesto en un 7 por ciento del sector servicios.

La CSS, hasta hace poco una institución económicamente sólida, ha sido reducida a una sucursal del sistema bancario. Los servicios de salud están en crisis y el sistema educativo ha colapsado.

La Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal) reiteró su rechazo al proyecto de unificación del sistema de salud. Las jornadas de protesta incluyen marchas a la Presidencia de la República y otras acciones. "La intención es privatizar los servicios de salud, aunque se diga otra cosa", aseguró el dirigente médico, Julio García Valarini, en un comunicado difundido en mayo de 2008. Según declaraciones de la ministra de Salud, Rosario Turner, el gobierno no tiene intención de privatizar el sistema.

El anteproyecto de ley del sistema único de salud disminuiría aún más la calidad de los servicios, propiciando la eventual quiebra de la Caja para justificar la privatización de sus activos financieros y la denominada “externalización” de sus servicios de atención médica.

Las ganancias que genera la economía panameña se concentran en un puñado de sectores ligados a las finanzas y a la especulación. El crecimiento más significativo entre abril y mayo de 2008 fue en el sector del transporte marítimo y portuario. Igualmente, el sector de la construcción de viviendas de alto costo y el “turismo residencial”. Ambos descansan en la especulación a futuro. El quincenario *Capital Financiero* informa, además, que “las primas de seguros suscritas en los primeros cuatro meses de este año aumentaron un 31 por ciento, pasando de US\$176,9 millones en 2007 a US\$232,2 millones en 2008, según la Asociación Panameña de Aseguradores”.

El quincenario agrega que “las tarjetas de crédito sigue siendo un negocio rentable para los bancos y un servicio cotizado por las personas... Las cifras al 31 de marzo de 2008 indican que el saldo de las tarjetas sumaron \$602,2 millones, 17 por ciento más con respecto al año pasado”.

Ese “futuro” está ligado en forma estrecha al proyecto de ampliación del Canal de Panamá que se inició en abril de 2008 en una ceremonia presidida por los altos dignatarios del gobierno. La ACP ya ha desembolsado cerca de US\$300 millones de un total que, por ahora, se proyecta alcanzará los US\$5,250 millones. La obra de ampliación, que incluye un juego de nuevas esclusas, concluirá en 2013, según la ACP.

La ampliación del Canal de Panamá atrae a especuladores de todo tipo. La legislación panameña, controlada por los intereses financieros, acomoda a todos los inversionistas. A fines de mayo de

2008, se aprobó un proyecto de ley con un artículo que se había introducido sin el conocimiento de los diputados. El artículo eliminaba las exigencias que se le hacían a los especuladores en bienes raíces que desarrollan proyectos en la cuenca del Canal de Panamá. Hay quienes esperan que el presidente Martín Torrijos vete el proyecto de ley. Hay otros que piensan que el artículo de marras fue insertado en el proyecto de ley mediante una maniobra que precisamente saliera del palacio presidencial.

Panamá sigue viviendo una ola de protestas que tienen su razón de ser en demandas originadas en insatisfacciones de larga data. Escuelas contaminadas por fibra de vidrio y en condiciones ruinosas, comunidades sin agua potable, caminos y puentes deteriorados, insoportables situaciones de violencia e inseguridad pública, hidroeléctricas y proyectos mineros que atentan contra el ambiente y los pobladores de esos lugares, son tan solo algunos de los reclamos. A ello se une el alza del costo de la vida, un sistema de transporte inhumano y una vialidad colapsada. Además, se anuncia la venta de las acciones estatales de las empresas privatizadas y un alza continua de los precios de los servicios y bienes de primera necesidad.

La supuesta “escasez” de energía térmica e hidroeléctrica presentada por el gobierno entre marzo y mayo de 2008 como un problema creado por la falta de lluvia y el alto consumo eléctrico, dejó sin explicar que la hidroeléctrica de Fortuna, en los tres primeros meses de 2008, exportó significativas cifras de energía por contrato y por mercado ocasional (*spot*). Fueron precisamente las exportaciones que disminuyeron las reservas en el mes de mayo. En un escenario de crisis la interconexión con Centroamérica debió haber resuelto el problema. La interconexión no se está utilizando con este fin.

Según Ariel Rodríguez, ambientalista y profesor universitario, “si la actual interconexión tiene una capacidad de 50 megawatts por hora, significa que en 24 horas tiene capacidad de 1,200 Megawatt. Que nadie pase por alto que hubo exportación hacia Centroamérica de energía de 6,859.37 megawatts entre enero y marzo de 2008 por parte de Fortuna”. Rodríguez concluye que “así como enviamos energía también podemos recibir energía para balancear en momentos coyunturales de disminución de capacidad”.

El 1° de mayo los trabajadores denunciaron la falta de empleo y el alto costo de la vida. En la capital panameña se dieron tres concentraciones distintas que dio el tono al nivel de división existente en el movimiento obrero. La marcha del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) le pidió al gobierno que tomara las medidas tendientes a aliviar el alto costo de la vida. Entre los dirigentes de CONATO se encuentran asesores laborales del gobierno nacional

Por otro lado, también se pronunció el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESOS) que denunció las políticas neoliberales del presidente Torrijos y planteó la necesidad de convocar a una constituyente originaria. FRENADESOS aglutina en su seno al poderoso sindicato de los trabajadores de la construcción y a la Asociación de Profesores de la República.

En la misma plaza histórica del “5 de Mayo”, donde estaban los otros sectores de la clase trabajadora, se reunió la recién formada Unidad de Lucha Integral Popular (ULIP) que está formada por obreros, empleados públicos y estudiantes. El dirigente y economista Juan Jované, pronunció un discurso de unidad popular, de lucha contra la oligarquía y por el socialismo. Panamá, 10 de junio de 2008.

**Análisis de coyuntura: PANAMA (junio – julio de 2008)**

## Neoliberalismo y militarismo se disputan agenda electoral

El gobierno panameño anunció un conjunto de medidas sociales económicas con el propósito de paliar el deterioro creciente de la calidad de vida de los sectores trabajadores. Entre las medidas se incluyen aumentos de salarios en los segmentos más bajos del sector público, también la ampliación de los programas que distribuyen donaciones en efectivo a las familias más pobres e, incluso, la elevación del techo del impuesto sobre la renta (de los asalariados) a US\$900 mensuales.

Siguiéndole los talones muy de cerca, el presidente Martín Torrijos dio a conocer un paquete legislativo que crearía un sector gubernamental encargado de la seguridad nacional, incluyendo aparatos de inteligencia, vigilancia de fronteras y la militarización de la Policía Nacional. El conjunto de decretos-leyes serían aprobadas en el marco de una delegación extraordinaria de poderes que le concedió la Asamblea de Diputados al Ejecutivo.

Los sectores populares, respondiendo al alto costo de la vida y las políticas neoliberales del gobierno, han anunciado un plan de acción que culminará en una huelga nacional probablemente para principios de septiembre de 2008. Según el Partido Alternativa Popular (PAP), en formación, “el llamado a huelga de un importante sector de gremios responde al alto costo de la vida y la continuidad del plan neoliberal”. Desde principios de julio se está organizando una marcha popular que se efectuará el 14 de agosto de 2008.

Según el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO), las medidas económicas del presidente Torrijos son una reacción “presionado por el llamado a la gran movilización popular y a la huelga”. El mandatario panameño “ha anunciado una serie de medidas que supuestamente buscan paliar la crítica situación que afrontan los hogares humildes producto de la política económica que ejecuta el gobierno del PRD en beneficio de los sectores más pudientes”.

Tanto el PAP como FRENADESO señalan que las elecciones de mayo de 2009 constituyen una de las preocupaciones centrales del gobierno. La coyuntura está marcada por “la campaña electoral que, de hecho, se inició a principios de 2008”, plantea el PAP. Por su lado, FRENADESO dice que “en otro acto circense, inserto dentro de un aberrante clientelismo electorero de todos los partidos políticos... Martín Torrijos – todo un Santa Claus en plena campaña política - trata de desviar la atención de la opinión pública de los graves problemas nacionales (y) anuncia incrementos de salarios para los empleados públicos”.

Las medidas del presidente Torrijos

Por primera vez en la historia de Panamá la inflación anual se mide en dígitos dobles. En los primeros cuatro meses de 2008, la inflación alcanzó el 13 por ciento. En el mismo período de 2007 había alcanzado otra cifra record de 6 por ciento. La inflación eliminó los buenos augurios que presenta el crecimiento del producto interno producto (PIB) en el presente año que se calcula cerca del 8 por ciento.

El crecimiento del PIB en 2008 se concentra en el sector terciario, donde predominan las actividades especulativas. El transporte marítimo, las reexportaciones, las actividades portuarias y la inversión inmobiliaria tienen tasas de crecimiento que superan el 15 por ciento anual. Sin embargo, la manufactura, el sector agropecuario y la agroindustria están marcando tasas de crecimiento negativas. El sector ganadero tiene más de diez años que se encuentra estancado. Entre las medidas anunciadas por Torrijos para mitigar la crisis alimenticia a nivel de los trabajadores está el denominado plan "Agrocompita" que contempla la compra directa por parte del gobierno de la totalidad de la producción nacional de arroz. Los arroceros, sin embargo, no

quieren vender su cosecha a los precios de compra del gobierno. Dicen que han recibido mejores ofertas de Costa Rica. Según el gobierno, la compra le permitirá seguir distribuyendo los productos "Compita" al mejor precio y calidad. La marca "Compita" se inició con el arroz y ha incorporado a más de 15 productos que se venden en ferias libres en las distintas ciudades del país.

Torrijos también anunció, a fines de julio, un sistema de gratificación extraordinaria de US\$160, por una sola vez, que recibirán los funcionarios que ganan hasta US\$1000 mensuales. Señaló que la gratificación que beneficiará a más de 160 mil funcionarios se hará efectiva el próximo 1 de septiembre y entregadas en cuatro partidas de US\$40 mensuales cada una hasta junio de 2009.

También se mencionó un aumento de US\$25 a más de 23 mil servidores públicos que devengan un salario mínimo de US\$300 mensuales y un incremento de US\$30 a 50 mensuales a más de 9 mil educadores que laboran en áreas de difícil acceso, a partir del 1 de agosto. El mandatario quien realizó el anuncio durante la incorporación de funcionarios a la Carrera Administrativa, dijo que en enero próximo, 35 mil educadores recibirán un aumento de US\$10.50, por el acuerdo alcanzado en 2006.

"El gobierno está haciendo su parte y el sector privado tiene que hacer la suya", expresó Torrijos quien dijo esperar que el sector privado tenga una propuesta de aumento salarial. "La empresa privada debe aliviar la situación de sus trabajadores, misma que debe ser producto de su iniciativa y no de un decreto gubernamental", planteó.

### **Neoliberalismo y militarismo**

En una iniciativa sorpresa, el presidente Torrijos anunció la inminente aprobación de cinco decretos-leyes que crearían un aparato de inteligencia militar al más alto nivel gubernamental. Los decretos con fuerza de ley crearían un Servicio de Fronteras que le permitiría negociar con gobiernos extranjeros la instalación de bases militares junto al vecino país de Colombia. Uno de los proyectos reorganizaría el Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional, creando un Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad. El director del Servicio sería miembro del Consejo de Gabinete con categoría de ministro de Estado. Todas las actividades del Servicio serían consideradas secretas, sin que tenga que rendir cuentas a entidad gubernamental alguna. En un artículo del proyecto se señala que "toda persona que organice, sostenga o instigue la realización de actividades que estén dirigidas a perturbar... la vida económica y social del país, será penado de acuerdo con el Código Penal". Para tener acceso a este tipo de información, los agentes del gobierno pueden actuar en secreto, con identidades falsas y sin necesidad de rendir cuentas. Tanto la Asamblea de Diputados, como la Corte Suprema de Justicia tendrían acceso limitado a las actividades del Servicio de Inteligencia. La Contraloría no tendría conocimiento de sus gastos o remuneraciones y sólo podría actuar mediante un "procedimiento especial". La iniciativa militar del presidente Torrijos se realiza pocos meses después que Panamá se integrara a la iniciativa de "Mérida" mediante la cual EEUU le proporcionaría recursos al país para adquirir armas y entrenar personal militar. En los dos últimos años, EEUU ha entrenado a más de dos mil efectivos en las escuelas militares ubicadas en ese país.

Torrijos también asistió a la "Cumbre regional sobre el problema mundial de las drogas", celebrada en Cartagena, Colombia. El encuentro reunió a 24 países de la región de Caribe y varios mandatarios. El propósito de la cumbre no fue aclarado pero se infirió de la convocatoria y la declaración final que se quería llegar a acuerdos en torno a las medidas militares que deben

tomar los países de la subregión. Los presidentes de Venezuela y Nicaragua no asistieron al encuentro.

Elecciones de mayo de 2009

Tanto PAP como FRENADESO han denunciado el proceso electoral que culminará en mayo de 2009 con la elección de un nuevo presidente. Se han ido descartando los candidatos y, en la actualidad, se perfilan tres candidaturas que competirán por la Presidencia de la República. La oposición actual de derecha presenta dos candidaturas. Por un lado, las primarias del Partido Panameñista favorecieron a Juan Carlos Varela, empresario agroindustrial. Por el otro, el Partido Cambio Democrático lanzará, por segunda vez, al dueño de supermercados, Ricardo Martinelli. La división en la oposición política favorece la candidatura del Partido Revolucionario Democrático (PRD), en el poder desde 2004.

El PRD celebrará en septiembre su convención para seleccionar su candidato a la Presidencia. Según las encuestas, la favorita es la exministra Balbina Herrera. Sigue de cerca el actual alcalde de la ciudad de Panamá, Juan Carlos Navarro. El candidato a Presidente del PRD tiene una base histórica del 33 por ciento del electorado. Pérez Balladares, candidato del PRD en 1994, ganó las elecciones con un 33 por ciento de los votos emitidos. Martín Torrijos perdió en 1999 con el 37 por ciento y ganó en 2004 con el 47 por ciento.

El candidato del Partido Panameñista, Juan C. Varela, tendría que sacar más del 40 por ciento de los votos en 2009 para ganarle al PRD. En 1999, Mireya Moscoso ganó las elecciones con el 42 por ciento de los votos, superando al actual presidente, Martín Torrijos. Sin embargo, Varela compite con Ricardo Martinelli, quien puede atraer un contingente significativo de votos y aguar su triunfo.

El PRD, organización fundada por el general Omar Torrijos en 1978, es un partido que ha evolucionado hacia el centro derecha del espectro político. En la actualidad, no existen partidos de izquierda en Panamá. El Partido Alternativa Popular (en formación) intenta cerrar esa brecha desde la izquierda. Además, FRENADESO, poderosa alianza de grupos laborales y gremiales, está llamando al voto en blanco.

La campaña electoral y los candidatos de derecha no abordan los problemas del país en sus planteamientos. En cambio, los movimientos sociales populares presentan en forma permanente – a nivel de las calles – las quejas de la población que tiende a empobrecerse como consecuencia de las políticas gubernamentales. De no ser por estas protestas, no existiría debate en torno a estos temas.

Los candidatos hacen énfasis en el amor de sus “corazones”, el camino que hacen sus “zapatos” y la necesidad de “mano dura”. Sin embargo, ninguno presenta planes para enfrentar la creciente pobreza. Tampoco se refieren a la informalidad del empleo que afecta a la mitad de la población trabajadora. Ninguno se pronuncia sobre el incremento de los precios de los alimentos o de la inflación del 20 por ciento anual.

Los candidatos de derecha (PRD, Panameñista y Cambio Democrático) pretenden continuar con las mismas políticas de educación, salud y seguridad social que están en quiebra. Aunque no lo mencionan, pretenden continuar ejecutando las políticas neoliberales que impulsan la transferencia de los recursos comprometidos con los servicios públicos al sector privado. Sus

propuestas le dan seguimiento al turismo especulador depredador, al igual que a la minería a cielo abierto y las hidroeléctricas ajenas al desarrollo del país.

Para enfrentar la violencia que ha llegado a su nivel histórico más alto abusan del “slogan” gastado de “mano dura” y aplauden la política de militarización acelerada subordinada a EEUU promovida por el actual gobierno.

Panamá, 3 de agosto de 2008.

### **Análisis de coyuntura (agosto de 2008)**

## **Políticas militares y neoliberalismo en panamá**

El presidente Martín Torrijos está sometido a una clásica operación “pinza”, producto de la falta de una estrategia política a nivel de gobierno y de un plan de desarrollo nacional. Desde adentro, los movimientos sociales se radicalizan y exigen un fin a las políticas económicas que empobrecen a las grandes mayorías. Para el 4 de septiembre se anuncia un “paro de advertencia” promovido por una amplia coordinadora de sectores populares. El gobierno resiste las presiones y protestas populares combinando medidas represivas y distribuyendo dádivas a los empleados públicos.

### **“Paro de advertencia”**

En años recientes el sindicato de los trabajadores de la construcción – SUNTRACS – ha encabezado las protestas y las marchas populares. El magisterio panameño – maestros y profesores – que han perdido sus antiguas posiciones de prestigio son, en la actualidad, sus principales aliados en las luchas populares. El 14 de agosto, bajo la coordinación de FRENADESO, diversos grupos marcharon a la Presidencia llevando como mensaje el anuncio de un paro de advertencia inminente. A la convocatoria amenazan con sumarse médicos, empleados públicos y transportistas.

En forma paralela a FRENADESO, ha surgido el Partido Alternativa Popular (PAP) y la Unidad de Lucha Integral Popular (ULIP). El 1º de mayo ULIP se hizo presente en la conmemoración de los mártires de Chicago. Igualmente, el 14 de agosto sumó a la marcha contingentes de trabajadores, educadores y empleados. Por otro lado, el viejo cascarón formado por el general Torrijos (padre del actual presidente) en 1978 – CONATO –, que agrupa a siete centrales obreras, estudia una propuesta de la patronal para aprobar un código de trabajo “paralelo”.

### **Intervencionismo militar de EEUU**

Desde afuera, EEUU presiona a Panamá para convertirla en plataforma militar de su política intervencionista. Panamá es una pieza clave de EEUU en su relación militar con Colombia, único gobierno de la región cuya legitimidad es seriamente cuestionada. La presencia militar de EEUU y el tráfico de drogas le permite a Colombia mantener su economía a flote. Panamá y Colombia comparten una porosa frontera a lo largo de la densa foresta tropical del Darién, donde – según fuentes oficiales de ambos lados - fuerzas armadas irregulares suelen buscar refugio y reabastecimiento.



Panamá es el único país de la región que puede convertirse en la presente coyuntura en un aliado estratégico de EEUU. Ecuador le acaba de exigir a EEUU la evacuación de su base militar en Manta. El nuevo presidente Lugo en Paraguay no tiene interés en ser aliado militar de EEUU. Honduras acaba de ingresar a ALBA. El Salvador va en curso de cambiar su gobierno conservador mediante elecciones a principios de 2009. Panamá parece ser el eslabón más débil y su militarización por parte de Washington está caminando a marcha forzada.

En Centro América los avances de ALBA son el resultado de las promesas incumplidas por parte de EEUU y México. Las famosas cuotas de petróleo de Fox nunca se materializaron. Honduras se sumó a Nicaragua como miembro de ALBA. Guatemala es socio de PetroCaribe. Tanto ALBA como PetroCaribe son iniciativas bolivarianas del gobierno de Venezuela. El gobierno de Panamá, sin embargo, se mantiene firme colaborando con la estrategia militar de EEUU pagando un precio muy alto.

A pesar de no contar con un ejército, y menos con una flota de guerra, Panamá participó en los ejercicios militares organizados por el Comando Sur de EEUU (estacionado en el sur de Florida) en lugares claves del Canal de Panamá. En el operativo – del 11 al 21 de agosto - participaron efectivos militares de 19 países que se sumaron a los “juegos” donde recibieron instrucciones de cómo usar las armas que EEUU les vende. Según el Comando Sur, la operación fue encabezada por el Ejército Sur de EEUU, estacionado en la ciudad de San Antonio (Texas), con personal desplegado en El Salvador (en la base aérea de Comalapa) y Honduras (en la base aérea de Soto Cano). El operativo también incluyó siete naves de la armada norteamericana. Según la agencia ACAN-EFE, las naves fueron dirigidas por *USS Tarawa*, de la IV FLOTA de EEUU.

A principios de año EEUU desempolvó su IV Flota de Guerra para patrullar las aguas del Atlántico desde el Caribe hasta Tierra del Fuego. Los ejercicios militares y la aparición de la IV Flota despertó sospechas entre los estratos militares del Cono Sur y de Venezuela. EEUU anunció la visita a Panamá de un barco de guerra Kearsarge recién desplegado “a ofrecer servicios (médicos) gratuitos en diferentes especialidades”. El informe destaca que “la visita es parte de un programa de cuatro meses, denominado *Promesa Continua*, para llevar asistencia humanitaria a seis países de la cuenca del Gran Caribe”.

#### Neoliberalismo especulativo

En materia financiera, Torrijos se ha mantenido inflexible y sigue la línea neoliberal que le dictan sus asesores económicos locales y foráneos. Como consecuencia, las plantas productivas continúan cerrando y los empleos productivos disminuyen. Al mismo tiempo, aumentan las operaciones especulativas que atraen a inversionistas de EEUU y de Europa de dudosa reputación.

El Canal de Panamá se convirtió a la vuelta del siglo en la fuente segura de ingresos para el país. Algo similar a la exportación de hidrocarburos, minerales y rubros agrícolas en otros países de la región. La ampliación de la vía acuática, iniciada este año y que terminará en unos cinco años, representa una riesgosa operación de los sectores especulativos del país y de la banca extranjera. Hay preocupación en torno a la crisis de EEUU y la disminución de las exportaciones chinas que transitan por la vía acuática panameña. Igualmente, han aparecido en el horizonte alternativas para el comercio marítimo como la ruta ártica

En materia de seguridad, Panamá le acaba de hacer concesiones peligrosas a EEUU, decretando reformas que prácticamente dejan en manos de ese país las instituciones represivas del país. Los operativos de seguridad han quedado concentrados en un Vice-ministerio de Gobierno y Justicia que no tiene que rendir cuentas. A su vez, se creó un Servicio Nacional de Fronteras (que sólo operará en la frontera con Colombia) que asistirá a EEUU.

El arreglo de seguridad nacional entre el actual gobierno panameño y EEUU calca el camino iniciado hace 60 años cuando EEUU armó a la Policía Nacional y creó la Guardia Nacional. EEUU financió sus actividades “secretas” con el negocio de las drogas que heredaron los militares panameños. Para los militares panameños la alianza con EEUU resultó trágica. En 1955 fue asesinado el presidente Remón, en 1981 fue “accidentado” el general Omar Torrijos y en 1989 fue secuestrado y condenado en Miami, el general Noriega. La alianza militarista con EEUU significó corrupción, una dictadura que duró 21 años y una invasión cuyo costo en vidas humanas todavía no ha sido investigado.

#### Seguridad nacional vs seguridad pública

La experiencia panameña enseña que la “seguridad nacional” no tiene relación alguna con la “seguridad pública”. Esta última se refiere a la ejecución de políticas que reduzcan la criminalidad y la delincuencia, así como la circulación de armas de fuego y estupefacientes. Entre las políticas para alcanzar estos objetivos habría que privilegiar, por un lado, más inversiones en educación, salud y seguridad social. Por el otro, hay que erradicar - poner fin - al suculento negocio que representan la creciente trata de “blancas”, los juegos de azar y al tráfico de drogas, caldos de cultivo de la corrupción y la criminalidad.

La llamada “seguridad nacional” – que privilegia el gobierno panameño - está al servicio de los intereses globales de las grandes transnacionales de EEUU. El siglo XXI en Panamá se inaugura con una combinación de militarismo y más neoliberalismo. El nuevo escenario implica una agudización de las contradicciones sociales, más enfrentamientos entre los sectores dominantes (que cuentan ahora con una fuerza represiva que no tiene que rendir cuentas) y un pueblo cada vez más rebelde así como una creciente desestabilización.

En julio del presente año el ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado D., viajó a la capital de EEUU a reunirse con el secretario de Defensa de ese país, Robert Gates. “Durante su estancia en ese país, visitó el centro antidrogas de la ciudad de Miami y el de entrenamiento militar de Fort Benning”, base militar donde se trasladó la antigua Escuela de las Américas, que funcionó en Panamá hasta 1984. Delgado comentó que “en ese centro reciben adiestramiento funcionarios panameños”, sin precisar su número.

La nueva ley que reorganiza el Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional crea el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad que en su artículo 75 señala que “toda persona que organice, sostenga o instigue a la realización de actividades dentro de las zonas de seguridad, que estén dirigidas a perturbar o afectar la organización y funcionamiento de las instalaciones del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, policiales, de los servicios públicos, industrias y empresas básicas, o a la vida económica y social del país, será penado de acuerdo al Código Penal”.

Panamá, 1º de septiembre de 2008.

## **Análisis de coyuntura (septiembre – octubre de 2008)**

### **La crisis económica y los movimientos sociales en Panamá**

El período entre septiembre y octubre de 2008 en Panamá fue dominado por la crisis económica a escala mundial que servirá de objeto de estudio en la primera parte de este análisis de coyuntura. Al final se abordará la situación pre-electoral panameña y se concluirá con una entrevista a un activista ambiental que resume la política pública sobre este sector.

La crisis financiera mundial desatada por la debacle de los mercados norteamericanos no hace mella sobre los asesores neoliberales que tiene el presidente Martín Torrijos. El gobierno panameño todavía no se pronuncia sobre las medidas que tomará para enfrentar la recesión económica que se extiende como un tsunami y sus efectos sobre la economía nacional.

El Ministerio de Economía y Finanzas considera que la crisis es pasajera. Tanto el Banco Nacional como la Superintendencia Bancaria se limitan a señalar que el sector tiene que actuar con “prudencia”. El vicepresidente Samuel Lewis N. ha sido el único funcionario que se ha pronunciado preocupado por la situación.

EEUU anunció que durante la primera semana de la crisis financiera, se esfumó el diez por ciento de su producto interno bruto. En Europa los dirigentes planean enfrentar la crisis con una “línea” de tres trillones de dólares lo que ya llaman una recesión (crecimiento cero de la economía por un período que supera los seis meses). En China, el gobierno pronostica una disminución de sus exportaciones, proyecta una reducción del 50 por ciento del crecimiento económico en 2009 y comenzó a reorientar su economía hacia el interior de su país.

¿Qué pasa en Panamá y qué hay que hacer? Panamá es un país exportador de servicios por excelencia. Sus ingresos dependen, en gran medida, de los servicios que presta a la marina mercante mundial (el Canal de Panamá y los puertos), de los servicios bancarios y de seguros e, igualmente, de la reexportación de mercancías (Zona Libre de Colón). En total, estos ingresos provenientes de las exportaciones representan cerca de cinco mil millones de dólares en ingresos.

El auge de estos servicios y otros difíciles de contabilizar, han generado, en los últimos cinco años, una “burbuja” inmobiliaria que representa otros 2 mil millones de dólares en inversiones anuales tanto internos como de origen externos. Panamá, además, exporta cerca de 500 millones de dólares en mercancías (el 10 por ciento del total), en su mayoría de origen agropecuario.

La pérdida de dinámica de la economía de EEUU se comenzó a sentir en Panamá a principios de 2008 con la disminución de la carga que pasa por el Canal con destino a los puertos de la costa oriental de ese país. Igualmente, se sintió una merma en la industria de la construcción así como una disminución de las ventas en la zona franca de Colón. A partir de octubre de 2008 la disminución de las importaciones por parte de EEUU tendrá un efecto aún mayor sobre los tránsitos de barcos por el Canal. EEUU y China ya anunciaron que su comercio se resentirá

fuertemente con la crisis. Igualmente, con la baja de los precios de las materias primas, que exportan los países de Sur América (petróleo, cobre, soya y trigo), la Zona Libre de Colón perderá una clientela significativa.

La baja en las actividades asociadas al comercio marítimo mundial y de las reexportaciones, tendrá repercusiones sobre la “burbuja” de la construcción. Los economistas que calculaban que la “burbuja” en la construcción podría durar hasta 2012 están haciendo nuevos cálculos. Si el estallido de la “burbuja” se adelanta para 2009 tendría repercusiones muy serias sobre el conjunto de la economía panameña. A su vez, la disminución de los precios de las materias primas en el mercado mundial podría poner fin a las actividades especulativas en el sector minero panameño así como en las exportaciones de productos agrícolas “no tradicionales”.

La combinación de todos los factores mencionados, consecuencia de la crisis económica de EEUU y sus repercusiones financieras a escala mundial, podría generar una desaceleración severa de la economía panameña. Incluso, sin incorporar estos factores a sus análisis, los asesores neoliberales del Palacio de Las Garzas están disminuyendo en un 40 por ciento las proyecciones de crecimiento económico para 2009.

Si esto ocurre, el próximo gobierno, que asume el poder el 1º de julio de 2009, tendría que reexaminar los planes de ampliación del Canal de Panamá y la inversión prevista para ese mega proyecto que supera los 5 mil millones de dólares. Por un lado, no habría como financiarlo. Por el otro, no habría tráfico marítimo que lo justifique.

*¿Cuál es la causa de la crisis?* La causa de la crisis económica se remonta a la década de 1970 cuando los mercados fueron inundados con una sobreproducción. Es decir, el incremento de la producción de bienes y servicios en la economía mundial no encontró consumidores con capacidad de comprar las mercancías que llegaban al mercado. La sobreproducción también puede describirse como sub-consumo.

Esto tenía un efecto negativo sobre las ganancias ya que el total de los salarios tiende a mantenerse estable a pesar de la disminución de las ventas de las mercancías. Este contraste impactaba negativamente el tercer elemento de la ecuación: las ganancias.

Para resolver este problema en las economías de mercado se introdujeron las políticas de ajuste económico (mejor conocidas como neoliberales). Se redujeron los salarios de los trabajadores (flexibilización), se privatizaron las empresas públicas y se comenzó a desregular las operaciones financieras. Todas estas medidas tenían como objetivo frenar la baja de la tasa de ganancia de los capitalistas mediante transferencias de los salarios que recibían los trabajadores.

*¿Cuál es la causa inmediata de la crisis de las bolsas de valores?* La crisis de la sobreproducción en EEUU se trató de solucionar mediante el “consumo de riesgo” repartiendo tarjetas de crédito y aprobando hipotecas sin control. El abuso de estos mecanismos terminó provocando la quiebra de los inversionistas y bancos más irresponsables. En total, 10 millones de hipotecas tambalean por falta de apoyo, los “*subprime*”.

El sector inmobiliario contagió al conjunto del sector financiero y, siguieron el mismo camino, las empresas productivas. Un ejemplo fue la gran empresa automovilística General Motors. Igualmente, recibieron el impacto las otras bolsas de valores en el mundo entero.

¿Cuál es el estado de la situación? La primera reacción ante los hechos fue la paralización de los créditos entre las instituciones bancarias temerosas de perder sus activos. La consecuencia inmediata de esta situación fue el frenazo de los préstamos bancarios. Se restringieron los créditos de consumo (tarjetas) creando un bajón en las ventas al detalle. De igual manera, se redujo el consumo de materias primas y se comenzó a reducir la producción así como las planillas. Subió la tasa de desempleo. El ciclo se volvió perverso al iniciarse nuevamente el proceso, golpeando aún más a las bolsas.

A principios de octubre el gobierno de EEUU decidió intervenir directamente el mercado. Para salvar a los inversionistas de la bolsa de valores, el Congreso de EEUU aprobó un monto masivo de transferencias para comprar las hipotecas “intoxicadas” y los créditos fracasados. (En Europa la intervención de los gobiernos fue aún más masiva). Además, comienza a comprar acciones de los bancos que resucite su capacidad para generar nuevos créditos y reiniciar los préstamos interbancarios.

La nacionalización de los bancos implica invertir más de 700 mil millones de dólares de los contribuyentes en los bolsillos de los banqueros. En teoría, dicen los funcionarios gubernamentales, cuando los bancos se recuperen en el futuro le pagarán a los contribuyentes con los intereses correspondientes. La lección que se aprende de la crisis es que el mercado no puede sobrevivir sin la supervisión y regulación del gobierno. El mercado quedará en régimen de libertad vigilada: sirve ahora el modelo chino de control político de la economía.

La mejor salida a la crisis es redirigir las inversiones hacia el sector productivo con el fin de complementar las actividades de exportación de servicios a la marina mercante mundial. Los sectores que tendrían que recibir un apoyo masivo son el agropecuario y el industrial. Se crearían múltiples fuentes nuevas de empleo tanto en la capital y, especialmente, en el interior. Además, renovarías las inversiones en el sector educativo así como en los servicios de salud, dos sectores estancados hace por lo menos dos décadas. La oferta interna, a su vez, generaría una demanda en el sector de la construcción.

## **Política**

El panorama pre-electoral recibió una fuerte inyección con la proclamación de Juan Jované como candidato independiente a la Presidencia de la República. Lo apoya un contingente de partidos, gremios, asociaciones y organizaciones populares. Para las elecciones del 3 de mayo de 2009, ya se habían proclamado otros cuatro candidatos de los partidos tradicionales. La diferencia entre Jované y los otros candidatos es que el profesor de Economía tiene, por un lado, un programa de trabajo que erradica las políticas neoliberales que han empobrecido a las mayorías panameñas. Por el otro, Jované ha señalado que le dará prioridad a la educación, salud y seguridad social para acabar con la iniquidad y violencia, utilizando de manera planificada los recursos de la posición geográfica del país (Canal de Panamá, puertos, comercio) así como la productividad de la fuerza de trabajo, en el campo y en la ciudad.

Entre los candidatos oficiales y de la oposición han surgido señales de alarma en las diferentes campañas. El Partido Revolucionario Democrático (PRD) se ha fraccionado con motivo de la arremetida del alcalde de la ciudad capital, Juan C. Navarro, contra el presidente Martín Torrijos. Pareciera que Navarro siente que Torrijos y la actual candidata a la Presidencia del PRD, Balbina Herrera, conspiran para acabar con sus aspiraciones políticas en el futuro inmediato.

Hay quienes afirman que Torrijos está maniobrando para introducir una reforma constitucional para reelegirse en 2014. La misma fecha que Navarro considera que es su oportunidad para lanzar su propia candidatura. En medio del conflicto, Balbina Herrera aparenta inclinarse hacia Torrijos.

El fin del discurso “neoliberal” orienta la mirada de los grandes banqueros y especuladores hacia candidatos de la oposición cuyas ideologías son conservadoras. Uno de ellos sería Ricardo Martinelli, cuyo Partido Cambio Democrático ha estructurado una alianza con Unión Patriótica – UP (una fusión entre los partidos Solidaridad y Liberal Nacional). El pacto le ha brindado a Martinelli la infraestructura necesaria para competir a nivel nacional. Sin embargo, entre los líderes de la UP existen fuertes conflictos. Guillermo Ford, quien acaba de renunciar como presidente del partido, siente que Martinelli maneja la campaña desde su bolsillo. Mientras tanto, Raúl Mulino (ex Solidaridad) y Aníbal Galindo (ex Partido Liberal) tienden a distanciarse.

El otro candidato presidencial, Juan C. Varela, del Partido Panameñista, se ha encontrado con una organización partidista indomable y que sólo puede ser dirigido por una figura carismática. Como empresario, y afiliado a la orden Opus Dei, de la Iglesia católica, Varela no logra disciplinar a los caciques del Partido que responden a los intereses de las capas medias y de muchos pequeños comerciantes y agricultores. También es cierto que no ha logrado atraer, como en campañas del pasado, a los grandes capitalistas y especuladores que buscaban un abanderado que se enfrentara a los gobiernos desarrollistas.

Por su lado, Jované tendrá que lidiar primero con el Tribunal Electoral para que remueva los obstáculos inconstitucionales a su candidatura independiente y, entonces, trabajar junto con todos los panameños para instaurar una verdadera democracia en Panamá.

#### Ambiente

En una entrevista concedida por el activista ambiental, Julio Yao, señala que “las actividades de minera Petaquilla, tanto de canadienses como de panameños, rebasan escandalosamente lo autorizado en el contrato firmado con el gobierno”. Se destaca la tala ilegal de madera para fines comerciales y no para el proyecto minero. Además, “la captura y aniquilación de especies de fauna, algunas en franca extinción, son cazadas por diversión o para traficar (cosa prohibida) y de lo cual son responsables individuos dentro de la mina y fuera de la mina, entre los que se encuentran acaparadores de tierras nacionales para fines “turísticos” e inmobiliarios”.

Yao agrega que “estos mismos personajes, de alta alcurnia social y política (algunos de cuyos empleados se relacionan con narcotraficantes) amenazan a los pobres indígenas y campesinos cuando capturan algún conejito pintado para poner la olla, o cuando cortan algún arbolito para sus necesidades. Al mismo tiempo, estos delincuentes le roban a los campesinos sus tierras”.

El movimiento social que se desarrolla en el norte de la provincia de Coclé, exige una investigación de cómo y por qué se otorgó un contrato semejante en detrimento total de Panamá. Los responsables de lesión patrimonial, deben ir a la cárcel, sus cuentas y haberes deben ser

confiscados. Según Yao esto no ocurrirá, obviamente, con un nuevo gobierno PRD ni de la oposición”.

El Estado panameño recibiría (en caso que la minera declare ganancias), el 2 por ciento de las regalías cuando, según la ONU hace 40 años, el mínimo es el 8 por ciento. El año pasado, Minera Petaquilla le pagó al distrito de Donoso, donde mayormente se encuentra el proyecto, ¡la astronómica suma de 318 dólares!

La comunidad de Coclesito (centro de las actividades asociadas a la mina) sólo tiene luz eléctrica unas pocas horas al día. No tiene agua potable (los estudiantes de la escuela se desmayan por deshidratación, diarreas, dolores de cabeza, etc.) “Las aguas servidas de la minera, según Yao, van a parar al río San Juan, a orillas del cual los cien becarios del IFAHRU friegan sus trastos (pailas, platos, etc.) y se bañan, lado a lado, con las maestras y profesores de la escuela, inmersos en aguas servidas, contaminadas con químicos, basura tóxica y restos de combustible, y todos con ronchas y picazón en el cuerpo”.

### **Análisis de coyuntura (Panamá: noviembre - diciembre de 2008) Crecimiento económico, crisis mundial y empobrecimiento**

El período entre noviembre y diciembre de 2008 en Panamá siguió dominado por la crisis económica mundial. En este análisis de coyuntura se abordará la crisis económica, la campaña electoral panameña que muestra nuevas tendencias y se concluirá revisando los múltiples movimientos sociales que han surgido en defensa del ambiente.

En Panamá el año 2008 se caracterizó por los conflictos, enfrentamientos y una crisis internacional que recorre el mundo como un tsunami. La falta de equidad, la corrupción y el empleo informal caracterizaron el desarrollo del país. El empobrecimiento creciente de la población no fue obstáculo para que funcionarios del gobierno y de la CEPAL coincidieran en afirmar que la economía cerraría en 2008 con una tasa anual de crecimiento del 9 por ciento.

#### **Economía**

Las estadísticas panameñas arrojan resultados que no dejan duda sobre el deterioro que sufrió el país en 2008. El crecimiento económico benefició a los ricos que se hicieron más ricos, mientras que los pobres cayeron en la indigencia y los trabajadores se empobrecen. La desigualdad se agudiza como resultado de las políticas públicas que intervienen desde arriba para beneficiar a los más ricos.

Hace 10 años, los trabajadores (el 80 por ciento de la población) recibían el 60 por ciento de las riquezas que producía el país. En 2008, la relación se invirtió y los trabajadores ahora sólo reciben el 40 por ciento de la riqueza. Este es el resultado directo de tres iniciativas públicas introducidas en el país en la década de 1990. Por un lado, la flexibilización de la fuerza de trabajo. Los trabajadores son tratados como mercancías, sin derechos humanos, que pueden ser explotados sin límite.

Por el otro, la desregulación que pretende convertir a los especuladores en dueños de los servicios de salud, educación, seguridad social y transporte colectivo. Los depredadores han introducido nuevas palabras como globalización, seguridad jurídica y modernización para legitimar la represión sistemática de toda protesta.

La tercera política pública es la privatización que le permite al gobierno intervenir directamente en la economía a favor de los más ricos. La política intervencionista del gobierno recrudesció en 2008, traspasándole a los depredadores los recursos destinados, incluso, a la seguridad

ciudadana. El colapso de estos servicios en 2008 es el resultado de la rapiña orquestada por quienes han convertido al gobierno en un repartidor de riquezas para los más ricos.

En 2008 a estas políticas públicas se acopló la nueva modalidad intervencionista mediante el cual el gobierno, ilegalmente, se dedica a traspasar tierras nacionales, playas, islas, fuentes de agua e, incluso, servidumbres a los especuladores que se enriquecen aún más.

A fines de noviembre, mientras las provincias occidentales del país sufrían los embates de las lluvias y la falta de provisiones, producto de las políticas públicas, el presidente Martín Torrijos celebraba junto con el rey de España, en Madrid, los éxitos de las múltiples inversiones especulativas de los peninsulares en el istmo panameño.

Las inundaciones cobraron 8 vidas, arruinaron las cosechas de miles de pequeños y medianos productores agrícolas y golpearon duramente a las comunidades indígenas de la serranía del Tabasará. Al mismo tiempo Torrijos y el rey se congratulaban de los buenos negocios. Lo que no se planteó en las declaraciones públicas, es que los inversionistas españoles se encuentran en una recesión económica, consecuencia de la crisis que afecta a Europa, especialmente Alemania. A pesar de encontrarse en medio de la crisis mundial, el presidente Torrijos todavía no se percata de la seriedad de la recesión económica. Sus asesores no le permiten ver el horizonte, donde aparecen las nubes cargadas de problemas para la economía panameña. El primer sector que se verá afectado es el comercio marítimo vinculado al Canal de Panamá, la Zona Libre de Colón y los puertos en ambos océanos. El golpe ya lo está sintiendo el sector de la construcción, cuya burbuja inmobiliaria probablemente reventará en 2009. El golpe de gracia lo sentirá la banca panameña y el sector exportador de bienes agrícolas.

El modelo neoliberal de la economía panameña, que ha desmontado los sectores productivos del país, ha dejado a los panameños sin defensas. Según los grupos vinculados a los sectores populares, urge invertir en los sectores productivos – manufacturero y agropecuario – sobre la base de un plan de desarrollo nacional.

El economista y candidato independiente a la Presidencia de la República, Juan Jované planteó que, en primer lugar, se debe tener en cuenta que la actual crisis es un hecho real y las autoridades no tienen nada que ganar, y el país mucho que perder, tratando de difundir la idea de que el país es inmune a la crisis global”. Jované propone “la construcción de un programa para enfrentar la crisis debe ser una prioridad nacional. El contenido de ese programa deberá guiarse a proteger principalmente a la población trabajadora y vulnerable del país. En este caso la seguridad alimentaria, la atención de la salud y la educación son elementos que deberán ser asegurados para toda la población aún en condiciones de profundización de la crisis. La asignación de los recursos públicos deberá basarse en esta premisa”. También opinó que “la crisis global llevará a demostrar el carácter inoportuno del proyecto de ampliación del Canal de Panamá, así como de los gastos destinados al mismo”.

Jované se refirió a la situación precaria de los trabajadores señalando que “la protección del empleo en condiciones de la crisis global pasa por un mejor aprovechamiento del mercado interno. Es fundamental generar un proceso de redistribución del ingreso para asegurar las necesidades básicas de los más vulnerables, así como pasar a una protección efectiva de la producción local y promover la participación activa del país en los procesos de integración complementaria y solidaria regional”. Jované recomendó que se rechazara el llamado TPC (Tratado del Libre Comercio) con Estados Unidos, cuya ejecución terminaría por destruir una buena parte de la producción nacional”. El Tratado ya fue aprobado por Panamá. Sin embargo, la mayoría demócrata en el Congreso de EEUU no permitió que el proyecto se presentara para su debate.



## **La campaña electoral**

El panorama pre-electoral recibió una fuerte inyección con la proclamación de Juan Jované como candidato independiente a la Presidencia de la República. Lo apoya un contingente de partidos, gremios, asociaciones y organizaciones populares. Para las elecciones del 3 de mayo de 2009, ya se habían proclamado otros cuatro candidatos de los partidos tradicionales. La diferencia entre Jované y los otros candidatos es que el profesor de Economía tiene, por un lado, un programa de trabajo que erradica las políticas neoliberales que han empobrecido a las mayorías panameñas. Por el otro, Jované ha señalado que le dará prioridad a la educación, salud y seguridad social para acabar con la iniquidad y violencia, utilizando de manera planificada los recursos de la posición geográfica del país (Canal de Panamá, puertos, comercio) así como la productividad de la fuerza de trabajo, en el campo y en la ciudad.

Entre los candidatos oficiales y de la oposición han surgido señales de alarma en las diferentes campañas. El Partido Revolucionario Democrático (PRD) se ha fraccionado con motivo de la arremetida del alcalde de la ciudad capital, Juan C. Navarro, contra el presidente Martín Torrijos. Pareciera que Navarro siente que Torrijos y la actual candidata a la Presidencia del PRD, Balbina Herrera, conspiran para acabar con sus aspiraciones políticas en el futuro inmediato.

Hay quienes afirman que Torrijos está maniobrando para introducir una reforma constitucional para reelegirse en 2014. La misma fecha que Navarro considera que es su oportunidad para lanzar su propia candidatura. En medio del conflicto, Balbina Herrera aparenta apoyar las pretensiones de Torrijos.

La candidata Balbina Herrera tiene que cuidar la canasta donde guarda los recursos que le permitirá competir en los seis meses faltantes de campaña. La crisis económica internacional ha creado incertidumbre entre los capitalistas panameños que apoyan su candidatura. El fin del discurso “neoliberal” orienta la mirada de los grandes banqueros y especuladores hacia candidatos de la oposición cuyas ideologías son más conservadoras. Uno de ellos sería Ricardo Martinelli, cuyo Partido Cambio Democrático ha estructurado una alianza con Unión Patriótica – UP (una fusión entre los partidos Solidaridad y Liberal Nacional). El pacto le ha brindado a Martinelli la infraestructura necesaria para competir a nivel nacional. Sin embargo, entre los líderes de la UP existen fuertes conflictos. Guillermo Ford, quien acaba de renunciar como presidente del partido, siente que Martinelli maneja la campaña desde su bolsillo. Mientras tanto, Raúl Mulino (ex Solidaridad) y Aníbal Galindo (ex Partido Liberal) tienden a distanciarse. El otro candidato presidencial, Juan C. Varela, del Partido Panameñista, se ha encontrado con una organización partidista indomable y que sólo puede ser dirigido por una figura carismática. Como empresario, y afiliado a la orden Opus Dei, de la Iglesia católica, Varela no logra disciplinar a los caciques del Partido que responden a los intereses de las capas medias y de muchos pequeños comerciantes y agricultores. También es cierto que no ha logrado atraer, como en campañas del pasado, a los grandes capitalistas y especuladores que buscaban un abanderado que se enfrentara a los gobiernos desarrollistas.

Por su lado, Jované tendrá que lidiar primero con el Tribunal Electoral para que remueva los obstáculos inconstitucionales a su candidatura independiente y, entonces, trabajar junto con todos los panameños para instaurar una verdadera democracia en Panamá.

Condoleezza

El 9 de diciembre Miembros del Bloque Popular Universitario protestan en la entrada de la Universidad de Panamá en rechazo a la llegada de la secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, a Panamá. Los dirigentes universitarios manifestaron que procederán a

quemar tres muñecos colocadas a un costado de la entrada de la casa de estudios superiores. El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales anunció en conferencia de prensa que realizará medidas de rechazo contra la visita de la alta funcionaria estadounidense. El dirigente sindical Gabriel Castillo manifestó que a pocos días de conmemorarse otro año más de la invasión estadounidense a Panamá -ocurrida el 20 de diciembre de 1989- es inaceptable que el Gobierno permita la visita de funcionarios de ese país. "Estados Unidos representa un país agresor", enfatizó Castillo.

La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, convocó a un total de ocho países de la región a una reunión que bautizó con el nombre de "Camino hacia la prosperidad en las Américas". La junta se realizó en un hotel de playa sobre el Pacífico donde el núcleo duro de países de la región que apoyan incondicionalmente la política exterior de Washington intercambiaron opiniones.

También llegaron como mosquitos, vestidos de negro impecable, decenas de representantes de las conocidas agencias financieras.

Llegaron los cancilleres y ministros de Comercio de los países que han aprobado tratados de Libre Comercio con EEUU – mas los que están en fila, Panamá y Colombia – preguntándose que busca Condoleezza a pocos días de su despedida. Lo que más interés despertó durante su visita relámpago fue la agenda militarista que trajo en su cartera.

A mediados de 2008 el antiguo ministro de Gobierno y Justicia panameño, Daniel Delgado D., bajo la guía del Departamento de Estado, visitó las dependencias de la Secretaría de Defensa en Washington, hizo escala en la base de Benning (donde opera lo que antes se llamaba la Escuela de las Américas) y finalmente se reunió con los militares de EEUU que dirigen el Comando Sur en los suburbios de Miami. Fue un periplo extraño en la medida en que el gobierno panameño no tiene relaciones formales con las fuerzas armadas de EEUU y todas las comunicaciones se efectúan a través del Departamento de Estado.

Sin embargo, los acontecimientos que se están dando en el ordenamiento militar de EEUU, así como las nuevas leyes que regulan la conducta de los estamentos militares en Panamá, apuntan hacia una creciente militarización de la Policía Nacional en el Istmo.

En el caso de EEUU, se aprobó la nueva "Estrategia de Comando 2016" como parte de un nuevo Plan de Comando Unificado. Los comandos (en alerta de combate) se convierten en Comandos Conjuntos de Seguridad con capacidad para coordinar las actividades de las agencias federales civiles en sus áreas de responsabilidad. Tradicionalmente, el embajador de EEUU es el director del "equipo" en el país donde está estacionado. La "Estrategia 2016" ahora subordina al "jefe de misión" a las directrices del Comando Sur

El Departamento de Estado eliminó su programa de formación policíaca en el exterior en la década de 1970 por los abusos cometidos contra los derechos humanos. La nueva "Ley de Asistencia al Exterior" fue reformada y ahora es el Departamento de Defensa quien decide a qué policías de la región entrenará en materia de "seguridad interna". Condoleezza Rice llegó a Panamá y anunció el cambio de mando. Por una lado, se despidió de sus "homólogos" y, por el otro, le pasó la antorcha a los militares.

Aniversario de la invasión militar norteamericana

Familiares de las víctimas de la invasión de Estados Unidos a Panamá, cuyo aniversario 19 se cumplió el 20 de diciembre, pidieron que se complete la lista total de muertos y que se reconozca apropiadamente. El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), integrado por obreros, educadores y profesionales, realizó una concentración frente a las antiguas instalaciones de la Embajada de Estados Unidos, para recordar la fecha y hacer pública la solicitud. Por otro lado, miembros del Movimiento Patriótico Nacional 20 de

Diciembre realizan una marcha desde el parque Porras hasta El George H.W. Bush padre invadió a Panamá recién inaugurado su período el 20 de diciembre de 1989. La ofensiva unilateral de Bush padre fue desproporcionada y contraria al Convenio de Ginebra, causando miles de muertes inocentes mediante un bombardeo indiscriminado de barrios populares de la ciudad de Panamá. La invasión militar de EEUU fue condenada en forma unánime por el mundo entero tanto en la OEA como en la ONU.

George W. emuló a su padre apenas doce años más tarde invadiendo a Irak en una acción cuya racionalidad aún se desconoce. Las Naciones Unidas calcula que han muerto 800 mil iraquíes inocentes, producto de bombardeos indiscriminados y acciones comandos de tropas norteamericanas que se han instalado en forma permanente en el país árabe.

En el caso de Panamá, han pasado cuatro gobiernos desde la *pesadilla* del 20 de diciembre de 1989. Ninguno ha planteado en instancia internacional alguna una denuncia por las acciones criminales del gobierno norteamericano. Aún más extraño, los gobiernos panameños de turno (Panameñistas y del PRD) se han negado a reconocer el carácter nacional de la fecha.

El presidente de EEUU (electo) Barack Obama promete poner fin, aunque en forma ambigua, a la irracionalidad militar norteamericana y reconocer la diversidad de intereses cuando envía sus negociadores a buscar acuerdos. Un próximo gobierno panameño tendría que presentarle a Obama un programa mediante el cual se salden las heridas abiertas por la irracional invasión militar del 20 de noviembre de 1989. El primer punto del acuerdo sería reconocer que la invasión fue un error que debe ser enmendado. El segundo, es recibir de parte de EEUU un compromiso que jamás usará la fuerza militar contra Panamá bajo circunstancia alguna.

#### Ambiente

Según Olmedo Carrasquilla, activista ambiental, “la movilización de campesinos e indígenas amenazados con proyectos energéticos, mineros y de turismo de mercado han crecido en los últimos meses”. Carrasquilla señala que “algunas de estas movilizaciones contaron con la participación de más de 800 indígenas”. Fue el caso de la comunidad de la Emplanada de Corcha, que sufre las amenazas de las empresas mineras e hidroeléctricas. “La comunidad indígena que, además de sufrir las yagas de la pobreza extrema y exclusión social, es actualmente hostigada por dichos proyectos que ponen en riesgo sus tierras comarcales y cultura”. Los conflictos de tierras “han puesto en alerta a otras comunidades que viven en ricas tierras y aguas, como es el caso de la Red de Desarrollo Integral compuesta por más de 20 comunidades que viven a orillas de los Río Liri y San Pablo en la provincia de Veraguas”. Igualmente “en Villa Alondra en Puerto Pilon, provincia de Colón los moradores cierran constantemente la carretera que conduce al histórico puerto de Portobelo porque se sienten amenazados por el proyecto de generación de energía a través de termoeléctricas. La comunidad exige que se suspendan inmediatamente los movimientos de tierra que se realizan actualmente. En ese mismo orden energético, la empresa francesa Suez Energy Central América tiene planes de desarrollar en Panamá tres proyectos energéticos con una capacidad instalada de 500 megavatios con una inversión de US\$650 millones. Con el funcionamiento de los proyectos Cativá en Colón, la reconversión a carbón de la planta de Bahía Las Minas y la Hidroeléctrica Suez en Gualaca, Chiriquí, se prevé que esta compañía energética tenga una presencia en el mercado panameño del 25 al 30 por ciento.

El consorcio español ENDESA-IBERDROLA, participa en la construcción del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC) y, mediante una aportación de US\$ 45.8 millones, coordinará y administrará la empresa. El proyecto que une a Colombia y Panamá

amenaza a la comarca Kuna Yala. El proyecto se encuadra en el Plan Puebla-Panamá, con una estrategia de desarrollo regional auspiciada por el Banco Mundial”.

Edgardo Garrido, ecologista, plantea que “si los constructores de estas hidroeléctricas, así como los realizadores de cualquier gran proyecto no son obligados por las autoridades a proteger al ambiente, el costo real de dichas obras será mayor al contabilizado. Esto porque una tierra erosionada es una tierra infértil, que no produce comida, y un río lleno de lodo demanda atenciones especiales para que el agua se pueda beber e incluso usar para generar energía, lo cual aumenta los costos”. Garrido también reclacó que “si no les importa con la gente y con el ambiente porque no tienen corazón, al menos demuestren que tienen cerebro: preocúpense por el dinero”.

Con relación a la venta de tierras, playas e islas, Olmedo Carrasquilla señaló que “el proyecto de ley 459, que se debate en la Asamblea de Diputados, es otra táctica gubernamental para legalizar el negociado de la venta de tierras” a orillas del mar (playas), islas y otras ubicaciones estratégicas prohibidas por la Constitución Política. “El proyecto establece que el precio para la adjudicación de los derechos posesorios que realice cualquier persona natural o jurídica será de seis dólares por cada hectárea. En aquellos lugares en donde no haya derechos posesorios, la adjudicación estará sujeta a los procesos de contrataciones públicas.

Según, el Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT), el 30 por ciento de los terrenos insulares y costeros posee título de propiedad y el resto del territorio pertenece al Estado. Hay una fuerte oposición a que la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) otorgue el derecho a los títulos de propiedad en las islas y costas, porque los mismos mantiene paralizada las solicitudes de títulos de propiedad y que sorpresivamente aparecen otros dueños de sus tierras.

La maniobra legal, según Carrasquilla, pretende “transformar derechos posesorios en títulos de propiedad, para que los dueños puedan ser sujetos de crédito bancario”. Carrasquilla agrega que “las características económicas que presenta Panamá no garantizan un amortiguamiento a las miles de familia que habitan estas tierras que en su mayoría no tienen un ingreso fijo”.

Quienes se benefician del negociado son políticos e inversionistas con alta influencia en el gobierno como una forma de agilizar los trámites de otorgamiento, pasando por encima de las leyes comarcales y de Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Carrasquilla señala que no podemos admitir tan nefasta ley que no aplica criterios ambientales y que ignora la realidad del país.

Por otro lado, la dirigente Yakarta Ríos denunció que el proyecto de ley 278 restringe a las comunidades su acceso a ríos y quebradas mediante la concesión a plazos de 30 años prorrogables a intereses privados. “Por si fuera poco, introducen un artículo que permite que nuestras fuentes de aguas subterráneas y superficiales puedan ser negociadas con otros Estados. Es decir, una especie de hidrocolonialismo, en el que Panamá cederá sus aguas a terceros países, declinando así su soberanía”.

## Salud

Poco antes de Navidad la Asamblea de Diputados suspendió el debate en torno al proyecto de ley sobre sexualidad y salud. Aún teniendo mayoría en la Asamblea el gobierno prefirió no enfrentar a la oposición de la Iglesia católica y de las congregaciones evangélicas lograron movilizar algunos medios contra el proyecto. La Alianza por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos alertó “a la ciudadanía sobre las graves consecuencias que tendrá para nuestra

salud esta decisión y ratificamos nuestro empeño de conseguir que el Estado, a través de sus gobernantes y con la participación activa de toda la sociedad, cumpla con su responsabilidad de velar porque los derechos sexuales y reproductivos, así como los servicios de educación, información y salud estén al alcance de todos los panameños y panameñas y dejen de ser un privilegio de pocos”. El proyecto, sin embargo, fue engavetado a pesar de haber sido enviado a la Asamblea por el presidente Torrijos.

Panamá, 31 de diciembre de 2008.

Preparado por Marco A. Gandásegui, hijo (Profesor de la U. de Panamá e investigador asociado del CELA), con la participación de Marina Abrego, Ricardo Martínez, Samuel Pinto, Deilys Avila, Jennifer Delgado (coordinadora) y Azael Carrera (en licencia).